

Grandes y pequeñas maniobras

MANUEL CAMPO VIDAL



Los temas de los Estatutos deben despojarse de toda carga sentimental, de toda pasión irracional y llevarse por todas partes al terreno de lo posible. En la foto, Suárez con los parlamentarios vascos de UCD.

titucional, con un espíritu de consenso, difícil de conseguir cuando el consenso ni siquiera parece estar presente en el partido del Gobierno, pero tampoco con una asunción totalizadora de los puntos de vista autonomistas. La oposición de la izquierda tiene un olfato especialísimo para las sensaciones de riesgo: rehuirlas dentro de lo posible, ha sido su principal preocupación desde que luchaba por ser legalizada. Tiene ahora la noción muy clara de que está ante una de esas situaciones de riesgo, y probablemente la más grave del posfranquismo.

E S tan fácil como inútil culpar a la gobernación de Suárez de los errores del pasado. Se puede tener la sensación abierta de que los problemas de las nacionalidades deberían haber sido abordados rápidamente y hace tiempo; era lógico que previamente se redactase una Constitución que hiciera posible una operación constructiva del problema, pero también dejó pasar el tiempo. Un tiempo en el que al mismo tiempo se ha radicalizado el nacionalismo autonómico, se ha agudizado el fenómeno del terrorismo, se ha hecho posible que el terrorismo actuara concretamente de una manera anticonstitucional e hiriendo directamente los sectores más unitaristas, y se ha ido radicalizando, sistemáticamente, la opinión y la fuerza de la derecha. Hasta se ha creado en gran parte del país una especie de hostilidad al País Vasco, que indudablemente se está capitalizando para obtener soluciones políticas, y se está explotando contra otros proyectos de estatuto.

L AMENTACION pasada. Ha sucedido así, la izquierda no ha sabido —o no ha podido, o no ha querido— acelerar la situación, el Gobierno sabe en estos momentos que tiene una bomba que le puede estallar en las manos. Si el Gobierno sabe qué presiones tiene encima, los negociadores vascos que se acercan a la Moncloa saben también qué presiones se ejercen sobre ellos, y hasta qué punto no pueden dar marcha atrás en una serie de puntos.

H AY un llamamiento clásico que hacer en estos momentos: el llamamiento a la razón. Tan clásico como generalmente poco escuchado. Los temas de los distintos estatutos, a partir del vasco, deben despojarse de toda carga sentimental, de toda pasión irracional, de toda utopía en cualquier sentido: deben llevarse, por todas partes, al terreno de lo posible. Cuando el señor Herrero de Miñón —UCD— observa que es preciso establecer una voluntad negociadora, adaptar después a ella la construcción jurídica, y resolver claramente el problema vasco como el más importante que tiene España en este momento, acertaba en las líneas generales. "Si no, nos devorará", fueron, al parecer, sus últimas palabras. Devorará posiblemente al señor Suárez, a UCD; pero puede devorar toda la coexistencia que laboriosamente se trabaja, y en la que todos han tenido que ceder mucho de sus aspiraciones máximas; o, por lo menos aplazarlas para cuando se tenga posibilidad de discutir razonablemente. ■

T ODAS las formulaciones periodísticas más o menos acertadas que dan por iniciada la "batalla de los Estatutos", la "guerra de las autonomías", la "cuenta atrás del autogobierno de los pueblos de España" y otros recursos bélico-lingüísticos similares, no logran reflejar con la suficiente fuerza la trascendencia del período político que se abre con la discusión de los Estatutos vasco y catalán en las Cortes y con los "motivos de desacuerdo" presentados por UCD: en realidad, acaba de empezar el último y más difícil capítulo de la transición política en la que se pondrá en juego la democracia misma no sólo por la sensación de cataclismo que para determinada concepción del Estado centralista y autoritario supone una nueva estructuración que contemple una profunda y efectiva descentralización y un respeto al sentido nacional de los distintos pueblos de España, sino, también, difícil y grave capítulo porque se trata en la práctica de la última oportunidad de abortar la

marcha hacia una democracia consolidada, hacia una sociedad moderna y civilizada.

Si ante cada paso importante en el proceso de transición —legalización de los partidos, aprobación de la Constitución, elecciones legislativas y municipales— las fuerzas reaccionarias se han conjurado para oponerse a la muerte definitiva del viejo régimen, el esfuerzo se anuncia desesperado ante la discusión de los Estatutos más importantes, importantes por ser los primeros y por corresponder a las dos comunidades en las que el sentido nacional se encuentra más históricamente enraizado.

La coreografía para el desarrollo de esa batalla se han encargado de diseñar la ofensiva iniciada el 11 de mayo —"Día de la patria española"— y el terrorismo que oportunamente la sirve, y sirve además desafiantes portadas para "El Imparcial" y "El Alcázar". En pocas semanas, con golpes como el atentado contra la cafetería California y la matanza de militares en Madrid, se ha logrado reconstruir un cli-



Para Tarradellas, Suárez está cometiendo errores graves y es necesario "un golpe de timón" para salir del difícil momento. En la foto, el presidente de la Generalitat con algunos parlamentarios catalanes.

Estatutos

ma de opinión antiautonomía más propio de hace veinte o treinta meses, cuando la democracia parecía enormemente más frágil, que de una situación en la que los elementos de consolidación deberían comenzar a divisarse.

Esa ofensiva ha favorecido un incremento del malestar en sectores considerables del estamento militar y ha permitido también que se acentuase el giro a la derecha emprendido por el Gobierno y el partido de Adolfo Suárez desde las pasadas elecciones legislativas y del que da explícita noticia el duro documento de los "motivos de desacuerdo" de UCD con los Estatutos vasco y catalán.

La violencia como regulador de la preautonomía

A esa última etapa de la transición que protagonizará el tema autonómico, se llega sobre ese decorado descrito y con una especial desmovilización de los sectores populares no sólo en Cataluña y el País Vasco, sino también en el resto de las zonas aspirantes a la autonomía que hubiesen podido servir de apoyo exterior solidario en estos difíciles momentos. Pero los entusiasmos populares por el autogobierno, expresados por miles de manifestantes en las eufóricas jornadas que siguieron a las primeras elecciones legislativas del 15 de junio de 1977, se encargó de moderarlos el desprestigio de la autonomía que hábilmente ha dirigido el poder retrasando eternamente el proceso, además de vaciarlo de contenido y, particularmente, por medio de la violencia. La preautonomía de Andalucía tuvo su muerte en Málaga; la castellana, sus enfrentamientos en Villalar; la valenciana, sus cáusticas polémicas y rivalidades en torno a la bandera; la catalana, un muerto en la calle el 11 de septiembre del 77 y otro el 11 de septiembre del 78, en el arco voltaico de la provocación grupuscular y la represión policial, y así sucesivamente. Como en la predemocracia, la violencia ha jugado en la preautonomía un papel regu-

lador de las movilizaciones (recuérdese el drama de Vitoria en marzo de 1976 o la provocación ultra en Montejurra en mayo del mismo año y la consiguiente disminución de participantes en todo tipo de manifestaciones).

UCD: enmienda a la totalidad

El documento conteniendo los motivos de desacuerdo de UCD con los Estatutos vasco y catalán viene a ser, en realidad, una enmienda a la totalidad, cuya responsabilidad ha querido Suárez compartir con Fernández Ordóñez, Martín Villa y Antonio Fontán, eventuales competidores por una Presidencia del Gobierno cuyo titular se resiste a dejar vacante. Acude UCD a negociar políticamente sobre unos criterios que el mismo partido gubernamental se ha encargado de desconsiderar durante meses al hablar tan sólo de "constitucionalidad" o "anticonstitucionalidad" de los proyectos de Estatuto, es decir, habiendo situado el debate en un plano jurídico por encima de un plano político

que se descartaba y que ahora se trata de recuperar.

Pero acude a negociar ahora UCD, y eso será, seguramente, lo más grave, con tal rebaja sobre sus propias posiciones en materia autonómica, que puede considerarse el fin de fiesta de la ilusión de que en España surgía una derecha moderna de nuevo cuño capaz de dar parcial respuesta, desde su perspectiva ideológica, a buena parte de los graves problemas heredados del régimen anterior. El líder nacionalista Jordi Pujol ha considerado que si la posición de UCD sobre el Estatuto catalán es la contenida en el texto filtrado —sólo uno de los cincuenta y cinco artículos del proyecto aprobado incluso por los ucedistas catalanes se mantiene en pleno—, no vale la pena sentarse a negociar. "Si la actitud del Gobierno es firme —añadiría el diputado catalán—, Cataluña habría cometido un colosal error al adoptar la vía del diálogo". Sin duda, el documento conteniendo los motivos de desacuerdo, si se mantiene en sus líneas esenciales, significará el acta de defunción de la derecha moderna que UCD quiso encarnar en el

inicio del proceso de la transición política española.

En ese marco difícil dos elementos nuevos han venido a complicar todavía más la situación: la invitación, en primer lugar, de Jordi Pujol a los socialistas catalanes para formar un Gobierno de coalición en Cataluña una vez aprobado el Estatuto, descolgando de las alianzas a los comunistas al considerar que una dirección de la política catalana en manos del PSUC puede resultar peligrosa. "¿A qué viene en estos difíciles momentos esa posición excluyente de Jordi Pujol se preguntaría públicamente el doctor Gutiérrez Díaz, líder comunista catalán, cuando hoy es más necesaria que nunca la unidad para ganar el Estatuto?".

Casi al mismo tiempo, Alejandro Rojas Marcos anunciaba sus motivos de desacuerdo con los Estatutos catalán y vasco introduciendo la afirmación de que "no son catalanes o vascos los que administrativamente viven en Cataluña o Euskadi". No parece este el momento más adecuado tampoco para que el líder andaluz encienda polémicas cerillas en el polvorín auto-



El documento conteniendo los motivos de desacuerdo de UCD con los Estatutos elaborados por vascos y catalanes viene a ser una enmienda a la totalidad. En la foto, el presidente del Gobierno con los parlamentarios centristas catalanes.

nómico. No es ningún secreto para nadie que desde diversas posiciones se ha tratado de desatar un clima "lerrouxista" con fines electorales en Cataluña desde que la convocatoria a las urnas existió como posibilidad en el horizonte político. Todos los intentos hasta el momento lograron ser desbaratados con la ayuda, incluso, de andaluces como Felipe González o el comunista Fernando Soto. Cabe pensar que Alejandro Rojas Marcos habrá valorado concienzudamente cuál es la real situación política del país y cuál debe ser su aportación a una solución progresista. Pero el peligro está ahora precisamente en que, más que una campaña lerrouxista con fines electorales, los motivos de desacuerdo con que ha sorprendido a Cataluña y al País Vasco Rojas Marcos sean utilizados, contra su voluntad, con miras al debilitamiento de las posiciones catalanas y vascas frente al poder central.

Entre tanto, reaparecerá al final de esta semana el presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, en Madrid, quien se ha resistido a aceptar la invitación del Gobierno en días pasados y ahora tomará la carretera de Madrid por su cuenta y con todo riesgo. Para Tarradellas las cosas van mal en España. Suárez comete errores graves y es necesario "un golpe de timón" para salir del difícil momento.

Estamos en la última etapa de la transición que separa la dictadura y un Estado democrático descentralizado respetuoso de las voluntades nacionales. Del mal estado de la mar, se tiene en estos días ambigua noticia si quiera sea a través de la decisión del Gobierno de investigar los rumores existentes en el ámbito castrense. De golpes de remo desafortunados que sólo crean confusión en momentos tan delicados, no faltan tampoco ejemplos. De la desorientación en el rumbo a seguir, parece informar la necesidad de un "golpe de timón". Y no falta quien quiere virar ciento ochenta grados y regresar al punto de partida o hundir el barco en último extremo antes que llegar al objetivo fijado. Todo eso sucede a bordo en estos decisivos días del final de travesía. ■ M. C. V.



La Gestora del PSOE y los grupos parlamentarios socialistas estudian los problemas autonómicos.

LA BATALLA DEL VERANO

FERNANDO LOPEZ AGUDIN

A CABAMOS de entrar en el verano que, sin duda, será la más decisiva de las pocas estaciones veraniegas democráticas que hemos conocido en los últimos tiempos. Es todo un síntoma de la profunda crisis por la que atraviesa el país el hecho de que cada estío es más intranquilo que el anterior y más tranquilo que el posterior. De momento el Congreso de los Diputados ha suspendido las vacaciones de julio en espera de que la realidad acabe también suspendiendo el descanso de agosto. Este es ya el sexto verano en que la política no veranea.

Dos estatutos, el de autonomía de las nacionalidades y el de los trabajadores, van a ser los ejes de estos largos y cálidos sesenta días; al final de los cuales sabremos no sólo el destino final de estos textos, sino, lo que es esencial, el tipo de salida política que va a tener el actual "impasse" gubernamental. El estatuto de Euskadi y Cataluña, acompañado de la ley sobre financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgá-

nica para la creación de policías por dichas entidades (previstas por el programa legislativo del Gobierno para el mes de julio); y el Estatuto del Trabajador, unido a la ley de Regulación de la Huelga (fijada por el citado calendario para el mes de agosto) junto con las vicisitudes de un patrimonio sindical pendiente de devolución a las centrales sindicales, van a ser los dos principales frentes de lo que se puede denominar, sin ningún tipo de énfasis, como la batalla de verano.

Batalla que se inscribe perfectamente en el amplio marco de la ofensiva involucionista de los sectores reaccionarios de Unión de Centro Democrático por imponer un tipo de salida portuguesa que acabe congelando no sólo los mencionados estatutos, sino todo el proceso democrático en su conjunto. Ambos estatutos, sobre todo el referente a la problemática autonómica, son la espoleta con que la derecha franquista, presente dentro y fuera del partido gubernamental y del mismo Gobierno, pretende imponernos

un "Nobre da Costa o Mota Pinto" en el palacio de la Moncloa. Es decir, el verano va a ser el "test" político para saber qué tipo de hojas van a caer en el próximo otoño: las involucionistas, barridas por los jardineros democráticos coaligados; o las democráticas, aplastadas por los jardineros "portugueses".

Dos estatutos democráticos

El haremos para medir esta prueba política será cotejar los Estatutos de Guernica y de CC. OO. (presentado por el grupo parlamentario comunista) con los que finalmente acaben aprobándose en el Congreso de los Diputados. El número de variaciones o correcciones, más cualitativas que cuantitativas, que se introduzcan en estos dos textos y el tipo de votación (UCD junto con los neofranquistas de CD, o UCD al lado de los grupos democráticos nacionalistas o de izquierda) serán el indicio imprescindible para saber qué sector del partido gubernamental va a ganar en